

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

APELACIÓN - SENTENCIA	
DEMANDANTE	ANA LUCÍA SERNA DURANGO
DEMANDADOS	COLPENSIONES – COLFONDOS S.A.
RADICADO	05001-31-05-007-2018-00076-01
MAGISTRADA PONENTE	MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
TEMA	Ineficacia del acto de traslado de régimen pensional
DECISIÓN	Adiciona y confirma

Medellín, seis (06) de agosto de dos mil veinte (2020)

Estudiado, discutido y aprobado en sala virtual

Esta Sala asume la competencia en esta instancia, conforme a la regulación establecida por el Gobierno Nacional en el Decreto 806 del 4 de junio de 2020 *“por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”*; en concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de Junio de 2020 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

En consecuencia, conforme al trámite establecido en las citadas disposiciones, que habilitan el procedimiento de sentencia escrita, y cumplido el traslado a las partes en los términos reglados, procede la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín a proferir sentencia ordinaria

de segunda instancia dentro del presente proceso, promovido por la señora **ANA LUCÍA SERNA DURANGO** en contra de **COLPENSIONES** y de **COLFONDOS S.A.**

La Magistrada Sustanciadora, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, declaró abierto el acto y a continuación, después de deliberar sobre el asunto, de lo que se dejó constancia en el **ACTA No 022**, se procedió a decidirlo en los siguientes términos:

I. – ASUNTO

Es materia de la Litis, decidir los recursos de apelación interpuestos por los apoderados judiciales de las entidades demandadas, contra la sentencia que profirió el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, en la audiencia pública celebrada el día 25 de septiembre de 2018; y a su vez conocer dicha sentencia en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de Colpensiones, de conformidad al artículo 69 del CPT y SS.

II. – HECHOS DE LA DEMANDA

Como fundamento de las pretensiones incoadas con la demanda, se expuso, en síntesis, que nació el 3 de noviembre de 1961; se vinculó al régimen de prima media con prestación definida administrado por el entonces Instituto de los Seguros Sociales desde el 29 de abril de 1982, donde permaneció hasta septiembre de 2000, para posteriormente trasladarse a COLFONDOS S.A., a partir de octubre de 2000, donde permanece actualmente.

Se duele que, el asesor de COLFONDOS S.A., no le brindó la información suficiente para haber tomado la decisión pertinente con la suficiente información; y que, al contrario, le ocultó información relevante, induciéndola al

error, y omitiendo brindarle toda la asesoría y acompañamiento pertinentes, indispensables para haber tomado la decisión que más le convenía.

Refirió haber adelantado las solicitudes pertinentes para regresar al régimen de prima media con prestación definida, sin haberlo logrado, por faltarle menos de 10 años para cumplir la edad pensional.

III. – PRETENSIONES

La acción judicial esta dirigida a que se declare la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad adelantado por COLFONDOS S.A., y que en consecuencia, se ordene a dicha entidad, trasladar a COLPENSIONES el capital acumulado en su cuenta de ahorro individual, debidamente actualizado, con los rendimientos financieros generados; debiendo ordenar a esta última, recibir todos esos valores y activar la afiliación de la demandante al régimen de prima media con prestación definida, como si nunca hubiese dejado de pertenecer al mismo; condenando a las demandadas a reconocerle las costas procesales del juicio.

IV. – RESPUESTA A LA DEMANDA

Una vez admitida la demanda, fue debidamente notificada, procediendo las accionadas a dar respuesta a la misma por intermedio de sus respectivos apoderados judiciales (folios 108 y ss. del expediente).

COLPENSIONES, describió el traslado de esta acción, según escrito visible a folios 108 al 119 del expediente. A través del mismo, se opuso a las pretensiones de la demanda; manifestó que no le constaban los hechos de la acción, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“inexistencia de la obligación demandada y falta de derecho para pedir”*, *“buena fe”*,

“prescripción”, “inexistencia de la ineficacia de traslado o multifiliación” y “falta de legitimación en la causa por pasiva”.

COLFONDOS S.A., allegó contestación a la demanda, visible a folios 156 al 161 del expediente.

A través de la misma, se opuso a la prosperidad de las pretensiones invocadas; negó los hechos de la acción, y; propuso las excepciones perentorias que denominó *“inexistencia de obligación alguna frente a Colfondos SA”, “no inversión de la carga de la prueba”, “ausencia de vicios del consentimiento”, “incumplimiento propio al deber de información”, “inexistencia del deber de realizar cálculos comparativos”, “ausencia de posesión de los dineros de cuenta de ahorro individual que se administran”, “saneamiento de la nulidad”, “prescripción” y “enriquecimiento sin causa”,* entre otras.

V. - DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

En audiencia pública celebrada el 25 de septiembre de 2018, la Juez de conocimiento, accedió a las pretensiones de la demanda, declarando la ineficacia de la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, al advertir que COLFONDOS S.A. no cumplió con su carga probatoria de acreditar haber brindado asesoría suficiente a la demandante, por lo que le impuso a dicha entidad, la obligación de devolver a Colpensiones los dineros que se encuentren en la cuenta de ahorro individual de la demandante, incluidos los rendimientos financieros que se hubieren generado, y las cuotas de administración cobradas.

Condenó en costas procesales a COLFONDOS S.A.; y a COLPENSIONES le impuso la obligación de recibir todos esos valores y activar la afiliación de la demandante al régimen de prima media con prestación definida, sin solución de continuidad.

VI. – RECURSOS DE APELACIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por los apoderados judiciales de COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES.

COLFONDOS S.A. sustentó la alzada, refutando todo el sentido de la decisión, solicitando a este colegiado su revocatoria, ya que se cumplieron todas las exigencias legales. Lo sustentó, expresando que, dentro del proceso no existe forma de establecer como se llevó a cabo la asesoría, adoleciendo el caso de prueba, que debió haber llevado a una decisión desfavorable a la demandante.

Agregó, que la demandante no es beneficiaria del régimen de transición, y que la afiliación fue voluntaria, lo cual estima que puede deducirse del hecho de que haya suscrito el formulario de afiliación, y haya, mes por mes, realizado los respectivos aportes; además considera que el hecho de que no haya hecho uso del derecho al retracto, es indicativo de su intención de pertenecer al RAIS.

Considera que el hecho de que existan diferencias económicas en uno y otro régimen respecto al valor final de la mesada pensional, no es una causa suficiente para que se declare la ineficacia del traslado; agregó que las sentencias en que se apoyó la A quo, no son similares al caso de la demandante, por lo que reprochó que se haya dado inversión a la carga de la prueba, y precisó que la activa no allegó siquiera la prueba testimonial para probar los hechos de la demanda, los cuales quedaron ausentes de prueba.

Adujo que existe contradicción entre lo dicho en el interrogatorio rendido por la demandante y el escrito de demanda, ya que la demandante confesó que se afilió voluntariamente.

Subsidiariamente solicitó, que en caso de que se confirme la ineficacia, se modifique la orden de devolución emitida en primera instancia, ya que considera que no deben devolverse los gastos de administración, ya que los

mismos se cobran en ambos regímenes, obedecen a una adecuada y correcta administración desplegada, y constituyen rubros de los que incluso se pagaron gastos previsionales a las aseguradoras, y por los que la actora estuvo cubierta frente a riesgos como la invalidez y la muerte.

Finalmente solicitó, que se revoque la condena en costas impuesta, argumentando que Colfondos SA actuó de buena fe.

COLPENSIONES, por su parte, estuvo inconforme con la sentencia de primera instancia, argumentando que existe una contradicción entre los dichos de la demandante en el interrogatorio, cuando narró unas circunstancias distintas a cómo ocurrió el traslado, y lo expresado en el escrito de demanda, considerando que ello constituye una falta al cumplimiento de la lealtad procesal.

Se opuso a la inversión de la carga de la prueba aplicada, considerando que no quedó claro que es lo que debe probarse en el marco del deber de información, y estima que la activa no alcanzó a probar lo afirmado, al haber desistido de la prueba testimonial, dejando en desventaja a las entidades demandadas, lo cual considera que debió llevar a la juez a proferir sentencia inhibitoria. Al efecto, solicita a este colegiado, que cite a los testigos solicitados por la demandante, para que se pueda guardar una línea de coherencia entre lo afirmado en la demanda, y la defensa que deben ejercer las demandadas.

Finalizó afirmando que para la época del traslado solo se exigía el diligenciamiento del formulario de afiliación, y solicitó a esta Sala, que se tenga en cuenta que, si bien hay un deber jurídico de información en favor de los asegurados, ese rigor no es el mismo, cuando la persona no es beneficiaria del régimen de transición o no tiene un derecho pensional consolidado, como ocurre en este caso.

Alegatos de Conclusión:

Encontrándose dentro de la oportunidad procesal pertinente, las apoderadas judiciales de las codemandadas, presentaron sus alegatos en segunda instancia, Colfondos SA solicitó a este colegiado, revocar la sentencia de primera instancia, destacando que, la demandante no es beneficiaria del régimen de transición pensional; firmó voluntariamente el formulario de afiliación, demostrando su interés en trasladarse; esa era la formalidad exigible para la época; no existieron vicios del consentimiento; subrayó los estadios que ha tenido la jurisprudencia nacional sobre el tema, y refutó la orden de devoluciones económicas dada por la juez de primer grado.

A su turno, la apoderada judicial de COLPENSIONES, insiste en la revocatoria de la sentencia de instancia objeto de revisión, y por el contrario proceda a desestimar las pretensiones y absolver a COLPENSIONES de cualquier responsabilidad que se le pudiere imputar, o por el contrario se declare la inhibición de proferir sentencia, pues quedo establecido una notoria desigualdad probatoria respecto a la parte demandada, ya que se privó a las demandadas debatir tanto los supuestos de hechos propuestos en la demanda como los expuestos por la demandante en su declaración, en tanto que el apoderado de la demandante de manera arbitraria desiste de la posibilidad de contra interrogar a los testigos, a fin de esclarecer las reales circunstancias en que se materializó el contrato de traslado de régimen. No obstante, y de considerar la sala que es procedente la declaratoria de ineficacia del traslado, se modifique la sentencia de instancia en el sentido de ordenar a la AFP COLFONDOS a trasladar a COLPENSIONES la totalidad de la cotización realizadas por el demandante sin descuento alguno, esto es, que además de los aportes y rendimientos, traslade el valor de todos los gastos de administración, aportes al fondo de pensión de garantía mínima, y cuotas de seguro previsional de manera indexada.

Teniendo en cuenta la anterior crónica procesal, se pasa a resolver de fondo, previas las siguientes

VII. – CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL

Los presupuestos procesales, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídica, como son demanda en forma, Juez competente, capacidad para ser parte y comparecer al proceso se encuentran cumplidos a cabalidad en el caso objeto de estudio, lo cual da mérito para que la decisión que se deba tomar en esta oportunidad sea de fondo.

Naturaleza jurídica de la pretensión.- La Ineficacia en el traslado de régimen pensional por ausencia de asesoría.-

El objeto central de esta Litis, se extiende a los puntos objeto de inconformismo planteados por los apoderados judiciales de las entidades demandadas; sin embargo, esta Sala se encuentra facultada para revisar todos los aspectos de la condena a Colpensiones, en virtud de la competencia de que se dispone conforme al artículo 69 del CPT y SS., en Grado Jurisdiccional de Consulta.

Partirá la Sala de establecer si el traslado del RPM al RAIS que realizó la demandante, a través de COLFONDOS S.A., alcanzó o no a producir los efectos jurídicos respectivos.

Sea lo primero referir que la libre escogencia de régimen pensional y el traslado entre regímenes que en tal virtud se efectúe, tiene como presupuesto esencial, el absoluto conocimiento del asegurado sobre las consecuencias jurídicas que se puedan derivar del cambio de régimen pensional, el cual ha de venir suministrado y garantizado por el agente adscrito al respectivo fondo, esto es, es de la propia esencia del acto de traslado, el suministro cabal y absoluto de toda la información, incluyendo el asesoramiento sobre todas las implicaciones pensionales y consecuencias que para el caso concreto pueden

darse, ya que se trata de una decisión relevante de la cual depende el futuro pensional del asegurado.

Esto lleva a la Sala a advertir que las obligaciones de asesoría no fueron creadas por el Legislador a través de recientes normas, sino que desde la propia concepción dualista de dos regímenes pensionales a través de la Ley 100 de 1993, se establecieron como de su propia esencia.

Así, la asesoría a cargo de la administradora, se erige en una obligación insoslayable, teniendo en cuenta la trascendencia e importancia de los efectos económicos que puede representar una decisión de tal naturaleza.

En términos generales, es preciso referir que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, ha venido desarrollando la tesis sobre la ineficacia del traslado entre regímenes pensionales, y a través de las **sentencias SL 1452 del 3 de abril de 2019 y SL 1688 del 8 de mayo de 2019**, ha consolidado su línea jurisprudencial, la cual venía desarrollándose –en su orden- a través de las Sentencias SL 31.989 del 8 de septiembre de 2008, SL 33.083 del 22 de noviembre de 2011, SL 46.922 del 3 de septiembre de 2014, SL 19.447 del 27 de septiembre de 2017, y SL 17.595 del 18 de octubre de 2017, decantando que el deber de información es ineludible; que es desde la propia creación de los regímenes que se estableció la obligación a las administradoras de brindar una completa asesoría pensional, pese a que han sido recientes normas las que han desarrollado el tema; que a nivel procesal rigen condiciones probatorias que le imponen a la respectiva administradora de pensiones acreditar en el juicio que en cada caso concreto sí adelantó la respectiva asesoría; que el primer acto de voluntad es el que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se hubieren brindado a los asegurados, después de haber tomado la decisión inicial; que la simple suscripción de un formulario de

traslado no denota un proceso serio y cabal de asesoría; no es necesario ni que el asegurado se encuentra ad portas de consolidar el derecho pensional, ni que necesariamente tenga que tener el beneficio del régimen de transición, y; que la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrada la formación del derecho a la pensión.

Esta última sentencia citada, proferida por la Sala de Casación Laboral (SL 1688 de mayo de 2019), precisó que, *“a diferencia de algunas nulidades que pueden ser depuradas por el paso del tiempo o la ratificación de la parte interesada, la ineficacia es insaneable en cuanto no es posible sanear aquello que nunca produjo efectos”*.

Esta postura es consecuente con los postulados que rigen en materia social, conforme a los cuales en el juicio jurídico sobre los derechos de los trabajadores y los afiliados a la seguridad social, resulta más relevante la realidad que los formalismos; la prescripción no opera en asuntos en los que se encuentra involucrado la formación del derecho a la pensión, y; el primer acto de voluntad que se juzga como determinante para la producción de efectos jurídicos en el traslado de régimen pensional, es el primero, sin que exista la posibilidad de saneamiento de la ineficacia, por asesorías posteriores que se le brinden al asegurado, después de haber tomado la decisión inicial, o por el hecho de que eventualmente exista movilidad entre varias administradoras pertenecientes al régimen de ahorro individual con solidaridad, ya que *“la oportunidad de la información se juzga al momento del acto jurídico del traslado, no con posterioridad, por lo que un dato será relevante si es oportuno, es decir, si al momento en que se entrega brinda al destinatario su máximo de utilidad”* (Sentencia CSJ SL 1688 de mayo de 2019).

A partir de lo anterior, pasa a desatarse la alzada conforme al...

CASO CONCRETO

Sea lo primero reseñar, que conforme a la prueba documental obrante a folios 13 y siguientes del expediente, se acredita que la señora ANA LUCÍA SERNA DURANGO, perteneció a COLPENSIONES desde el 29 de abril de 1982, donde permaneció hasta septiembre de 2000, para posteriormente trasladarse a COLFONDOS S.A., a partir de octubre de 2000, donde permanece actualmente.

Revisadas en detalle las consideraciones de la A quo para arribar a la decisión de declarar la ineficacia del traslado de régimen pensional de la actora, esta Sala encuentra que las mismas se encuentran ajustadas al sentido de la jurisprudencia nacional, y consultan las particularidades del caso, teniendo en cuenta que COLFONDOS S.A. no alcanzó a probar dentro del juicio, haber brindado asesoría con suficiencia a la demandante, en su proceso de traslado.

Teniendo en cuenta que la validez del traslado de régimen tiene como requisito esencial y presupuesto fundamental el cumplimiento de parte de la administradora de todas las obligaciones de asesoría pensional correspondientes al caso concreto, esta Sala encuentra que la decisión de la A quo, tuvo en cuenta la dinámica procesal probatoria que rige en estos casos, auscultando más allá de la simple suscripción de un formulario de afiliación con nota de supuesta voluntariedad y libre escogencia, para concluir en la ineficacia de un acto celebrado en el año 2000, que no alcanzó a producir efectos, al ser ineficaz.

Sus planteamientos en orden a encontrar intrascendente el hecho de que la actora se encuentre inmersa o no en el régimen de transición pensional, consultan la línea jurisprudencial trazada sobre el tema, y son consecuentes con la obligación general de asesoramiento frente a cada caso particular, sin

importar que tan consolidado o en formación tenga su derecho pensional y expectativa de alcanzar el derecho.

Y es que si bien, el legislador ha dispuesto la obligación de que el traslado quede documentado en un formulario de afiliación, en dicha suscripción no se agotan todas esas obligaciones profesionales a cargo de las administradoras previsionales, ya que debe existir todo un proceso de asesoría absoluta, que además del formulario de afiliación comprenda a cabalidad un asesoramiento sobre todas las implicaciones que puedan representar para el asegurado el cambio del régimen pensional de reparto a uno capitalizable, que fue lo que no ocurrió en este caso.

Así, resulta irrelevante que la asegurada se encuentre inconforme con el monto de la mesada pensional en uno y otro régimen, ya que el tema de la ineficacia no puede evaluarse en concreto sobre la causación de un perjuicio, sino por la simple revisión de si existió o no una cabal asesoría. En consecuencia, no es el simple inconformismo económico de la asegurada con la mesada lo que genera la ineficacia, sino la ausencia de información al momento del traslado.

Desde este punto de vista, no tienen vocación de prosperidad las argumentaciones de la apoderada judicial de COLFONDOS S.A., planteadas en la alzada, y ampliadas en la etapa de alegatos de conclusión, ya que estas exigencias han existido desde la promulgación de la Ley 100 de 1993, y a nivel procesal se acreditan en el marco de la inversión de la carga de la prueba, sin que importe si la demandante presentó o no los testigos solicitados, correspondiendo al respectivo fondo acreditar que en efecto brindó la asesoría suficiente al asegurado, que fue precisamente lo que no alcanzó a probar COLFONDOS S.A. en el debate probatorio. No se encuentran llamadas a prosperar sus consideraciones en torno a pretender que, por no haber hecho uso la actora del derecho al retracto para regresar a prima media, ello fuere saneador de la ineficacia; o que el hecho de efectuar aportes periódicos a la administradora fuere indicativo de que se conocían en detalle todos los

pormenores del régimen por parte del asegurado, de cara a su situación concreta; ya que como se ha reseñado en precedencia, la importancia de la asesoría y la información, se enmarcan en oportunidad del acompañamiento al asegurado, que no puede ser otra que el momento previo a suscribir la afiliación.

Por lo demás, las supuestas contradicciones en que habría incurrido la demandante en la diligencia de interrogatorio de parte, que tanto la apoderada judicial de COLFONDOS S.A., como el apoderado judicial de COLPENSIONES hacen ver, no son tales, ni tampoco constituyen causales que denoten la configuración de faltas al deber de lealtad procesal de las partes, ya que esas manifestaciones se enmarcan en las creencias que la actora tenía sobre las virtudes del régimen pensional privado, que terminaron siendo las únicas informaciones que le fueron brindadas por el asesor de COLFONDOS S.A., sin ahondar en explicaciones técnicas y jurídicas, que le hubieren podido ayudar a tomar en su momento la decisión que más le convenía.

De esta manera, esta Sala no acogerá la solicitud de la apoderada judicial de COLFONDOS S.A., tendiente a que se exonere a la entidad del pago de las agencias en derecho, ya que dicha entidad fue quien generó la ineficacia que se está declarando, sin que sea posible concluir que actuó de buena fe, ya que la regla del artículo 365 del CGP., impone objetivamente la obligación de imponerle el pago de las agencias en derecho a la demandante, tal y como lo hizo la A quo.

En consecuencia, los recursos de apelación impetrados por los apoderados judiciales de las demandadas, no están llamados a prosperar, por lo que esta Sala **CONFIRMARÁ** la decisión de primer grado.

Ahora, la apelación de la apoderada judicial de COLFONDOS S.A., comprende subsidiariamente la solicitud de que se modifique la orden de devolución que la A quo le impuso, solicitando que la misma no se extienda a los gastos de administración, argumentando que, los mismos se cobran en

ambos regímenes, obedecen a una adecuada y correcta administración desplegada, y constituyen rubros de los que incluso se pagaron gastos previsionales a las aseguradoras, y por los que la actora estuvo cubierta frente a riesgos como la invalidez y la muerte.

Es preciso destacar que el sentido de dicha apelación, coincide con los tópicos que precisamente esta Sala debe abordar en conocimiento en Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad pública codemandada, al tratarse de un tema que involucra la financiación de las eventuales prestaciones económicas que se causen a futuro, por lo que serán desatados de manera uniforme:

Al respecto debe decirse, que, esta Sala no accederá a tales pedimentos, teniendo en cuenta que el efecto jurídico consecuencial a la declaratoria de ineficacia, es que las cosas retornen al estado inicial, tal y como si el traslado no hubiere existido, luego, sus argumentos planteados en oposición a la orden de devolución los gastos de administración, no alcanzan a destruir tal obligación, ya que, si bien COLFONDOS S.A. adelantó una debida administración de los recursos de la cuenta de ahorro individual de la asegurada, generando rendimientos, es claro que no puede mantenerse el cobro de unas sumas por administración, cuando fue el propio fondo privado el que dio lugar a la ineficacia. En consecuencia, todo debe retornar a Colpensiones, como si COLFONDOS S.A. nunca hubiere estado facultada para efectuar descuento alguno.

Incluso, esta Sala **ADICIONARÁ** el numeral tercero de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, a efecto de que COLFONDOS S.A., no solo devuelva a COLPENSIONES las cuotas de administración descontadas, sino que –por el efecto de las restituciones que deben operar producto de la ineficacia-, devuelva también los descuentos realizados con destino al fondo de la garantía mínima, las primas de seguros y reaseguros cobradas y el eventual bono pensional, de llegar a existir, lo cual deberá realizar dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

COSTAS PROCESALES DE 2 INSTANCIA.

En esta instancia se han causado costas procesales, a cargo de COLFONDOS S.A, por haber resultado vencida en el recurso de apelación, debiendo dicha entidad, pagar a la demandante, la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, a título de agencias en derecho de segunda instancia.

VIII. - DECISIÓN.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR el numeral tercero de la parte resolutive de la sentencia de primera instancia, de fecha y procedencia conocidas, que se conoce en Apelación y Consulta, a efecto de que, **COLFONDOS S.A.**, no solo devuelva a **COLPENSIONES** las cuotas de administración descontadas, sino también los descuentos realizados con destino al fondo de la garantía mínima, las primas de seguros y reaseguros cobradas y el eventual bono pensional, de llegar a existir, lo cual deberá realizar dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.


SEGUNDO: CONFIRMAR dicha sentencia en todo lo demás.

TERCERO: CONDENAR a **COLFONDOS S.A.** a pagar a la señora **ANA LUCÍA SERNA DURANGO** las costas procesales de segunda instancia, fijándose agencias en derecho, en la suma de un salario mínimo legal mensual vigente para el año 2020, de conformidad a lo expuesto en la parte motiva de la presente sentencia.


CUARTO: En su debida oportunidad, devuélvase el expediente al juzgado de origen.

SE ORDENA la notificación por estados de esta providencia, y se autoriza su reproducción virtual a las partes del proceso.


Los magistrados



MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado



LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL
Magistrada

Certifico:
Que el auto anterior fue notificado por
ESTADOS Nro. 107 fijado hoy en la
Secretaría de este Tribunal, a las 8 a.m.

Medellín, 10 de agosto de 2020

Secretario